Acceso de las pymes a los mercados de contratación pública internacional en el marco de las relaciones Unión Europea – Chile

Dostęp MŚP do międzynarodowych rynków zamówień publicznych w ramach stosunków Unia Europejska – Chile

Enrique Díaz Bravo

*Universidad Internacional de la Rioja, España y, Facultad de Derecho,
Universidad Santo Tomás, Chile*

Introducción

Esta colaboración se enmarca en el análisis de la regulación del Mercado Único Europeo y la regulación contenida en el Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea. Se abordará el marco normativo de intercambio comercial de la Unión Europea con interesados y oferentes de terceros países, y los principales hitos recientes que permiten visualizar el desarrollo de la estructura legal europea respecto de nacionales de países no-UE en contratación pública.

Del mismo modo, se analizará el entorno normativo que permite la participación de empresas de menor tamaño, considerando micro, pequeñas y medianas empresas, tomando en cuenta las medidas de promoción y protección de la participación de las referidas empresas en el marco de las relaciones comerciales de la UE y uno de sus socios comerciales, como es Chile.

De este modo, se revisarán los principales elementos del Acuerdo de Asociación, y las novedades que las modificaciones, realizadas y en curso a la fecha, han detectado en materia de barreras de acceso a los diversos mercados existentes entre las partes, con el objetivo de evaluar determinadas normas, procedimientos y herramientas existentes, con el fin de contribuir a la mejora del entorno normativo y así promover la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en las oportunidades que las diversas administraciones públicas ponen a disposición de los nacionales de las partes contratantes.

1. Las relaciones entre la UE y terceros países en contratación pública

Resulta relevante realizar una aproximación a una materia que tiene un importante impacto en las relaciones internacionales, tanto políticas, sociales como económicas, y que se ha puesto de relieve en el marco de la crisis de salud pública que enfrentamos actualmente, como es la contratación pública internacional y las relaciones entre los diversos actores de la comunidad global¹.

Así, es posible afirmar que la contratación pública es hoy una de las más importantes actividades de los gobiernos, por su extraordinaria relevancia en el producto interno bruto de los países, cerca de un 13,3% en los países de la UE², y cerca de un 12% en los países miembros de la OCDE³; y, adicionalmente, porque es una actividad pública que permite alcanzar además del foco básico de la contratación -suministro de bienes, servicios y obras-, otra serie de fines de políticas públicas estratégicas, todos los que han logrado instalarse en la mayoría de los países democráticos, incorporando criterios y objetivos, tales como compras sostenibles, medidas positivas de participación para las micro, pequeñas y medianas empresas, innovación, medidas para promover la igualdad de género, incorporación de personas con discapacidad, entre otras⁴.

Uno de los principales actores del comercio internacional es la Unión Europea, en adelante UE, la que ha desarrollado un importante entramado normativo relativo a la contratación pública⁵ que le ha permitido tener uno de los mercados más abiertos, accesibles, competitivos⁶ y transparentes del orbe. El ordenamiento jurídico de la UE, en el mismo sentido, se encuentra dotado de amplias garantías jurídicas para la protección de los derechos e intereses tanto de las administraciones públicas como de los ciudadanos y empresas que participan en los procesos de contratación pública⁷. Del mismo modo, se ha provisto de medidas tendientes a entregar la mayor estabilidad, seguridad y previsibilidad jurídica para las inversiones, y mecanismos

¹ Un importante trabajo sobre la materia es: J.A. Moreno Molina and R. Cancino Gómez, *La contratación pública internacional. Unión Europea – México*, 1ra ed., Oxford 2018.

² Public Procurement Indicators 2017. DG GROW, G - Single Market for Public Administration. G4 - Innovative and eProcurement. July 9, 2019.

³ OECD, Contratación pública <http://www.oecd.org/gov/contratacion-publica/>.

⁴ F. Hafsa, N. Darnall, S. Bretschneider, *Estimating the true size of public procurement to assess sustainability impact, „Sustainability”* 2021, vol. 13, iss. 3, 1448. <https://doi.org/10.3390/su13031448>.

⁵ Principalmente son tres directivas las que regulan el sistema de contratación pública: Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE; y, la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.

⁶ A.Sánchez Graells, *Competititon law and public procurement*, en *Contratación pública global: Visiones comparadas*, eds. E. Díaz Bravo, J.A. Moreno Molina, Valencia 2020.

⁷ Un tratamiento sobre el sistema de recursos en contratación pública en la Unión Europea y en España puede ser visto en: E. Díaz Bravo, *El recurso en materia de contratación pública en el Derecho europeo y su*

que garanticen la integridad de los procedimientos para evitar el fenómeno de la corrupción⁸.

Ahora bien, teniendo presente la relevancia de la disciplina de la contratación pública y las dificultades en el establecimiento de mercados abiertos, competitivos y transparentes, incluso en espacios supranacionales de alto desarrollo técnico y normativo como es la UE, el examen del comercio internacional, fuera de las fronteras de la UE o bien, dentro del propio mercado común europeo pero con participantes extracomunitarios, se encuentra sometida a mayores preocupaciones, dificultades y desafíos.

En dicho contexto es que se ha desarrollado a través de diversos instrumentos internacionales un relevante acervo normativo que ha logrado perfilar una regulación orgánica a nivel global en la disciplina que abordamos en este trabajo. Especialmente son destacables el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio y Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública, como puntas de lanza en contratación pública⁹. No obstante ello, las normas multilaterales no han alcanzado una suerte de obligatoriedad entre las partes, debido a su carácter *soft law*, o al menos en su aplicación material se ha visto una importante debilidad de estas normas internacionales.

En el mismo sentido, y frente a la necesidad de la UE de proteger los intereses de los países miembros, y sus nacionales, y de garantizar relaciones de igualdad con terceros países que tengan como foco promover el comercio internacional en contratación pública internacional es que se han celebrado una serie de acuerdos de libre comercio, que cumplen con los principios de transparencia, igualdad de trato y no discriminación¹⁰.

En la actualidad, esta última mantiene vigentes 17 acuerdos de libre comercio que contienen normas sobre contratación pública¹¹, y se encuentra en proceso de negociación para la celebración de nuevos acuerdos sobre la materia¹². No obstante los datos anterior, la apertura del mercado interno de la UE no ha sido simple ni ha

aplicación en España, Valencia 2019; y, en el caso italiano idem, *El sistema de recursos en la contratación pública italiana: procedimientos y control de litigiosidad*, „Revista General de Derecho Administrativo” 2020, n° 54.

⁸ Sobre la materia, véase J. Miranzo Díaz, *La prevención de la corrupción en la contratación pública*, Madrid 2019.

⁹ Sobre la materia, puede verse un tratamiento detallado en: R. Cancino Gómez, M. López Olvera, *La contratación pública*, Madrid 2019, p. 67 y ss.

¹⁰ En materia de principios de la contratación pública, dos trabajos altamente recomendados: J. Rodríguez-Arana, *Los principios del Derecho Global de la contratación pública*, en *Estudios de Derecho administrativo. El Derecho administrativo iberoamericano, innovación y reforma. Libro homenaje al profesor Juan Carlos Cassagne*, eds. JC. Morón Urbina, J.D. Ordóñez, Lima 2018.; y, J.A. Moreno Molina, *Principios generales del derecho de la contratación pública internacional*, en *Contratación pública global: Visiones comparadas*, eds. E. Díaz Bravo, J.A. Moreno Molina, Valencia 2020.

¹¹ Comunidad Andina, Armenia, Canadá, América Central, Chile, Georgia, Iraq, Corea, Kazakstán, Kirguizistán, Mercosur, México, Moldavia, Singapur, Suiza, Ucrania y Vietnam.

¹² En los que destacan: Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Nueva Zelanda, Túnez y Uzbekistán.

estado exenta de obstáculos, tal como relata Moreno Molina la eliminación de las prácticas proteccionistas y discriminatorias¹³ ha tenido un largo camino y evolución desde 1950 hasta nuestros días, especialmente en lo relativo a la eliminación de las *barreras visibles al mercado* interior, cuestión que ha sido una preocupación principal de la Comisión Europea y del propio Tribunal de Justicia de la UE en su relevante jurisprudencia.

Del mismo modo, ha existido preocupación por parte de las instituciones europeas para regular las relaciones en materia de contratación pública con países no-UE, por lo que se realizará un breve repaso de algunos de los principales hitos en dicho sentido por parte de la UE con terceros países.

1.2. Hitos en el desarrollo de la regulación con terceros países

En el marco del Derecho de la Unión Europea es posible distinguir, al menos, cuatro hitos recientes que colaboran para ubicar las relaciones de la UE con los intereses extracomunitarios.

- a) El primero de ellos se ubica durante la discusión de la Directiva 92/13/CEE¹⁴, la que al contemplar los requisitos de legitimación para el acceso a los procedimientos de recursos de los interesados en obtener un determinado contrato de aquellos regulados por dicha Directiva, debió realizar con especial cuidado una prevención respecto del alcance y amplitud del término “cualquier persona” como criterio de legitimación. En dicho contexto, el término “cualquier persona” que tenga interés en los procedimientos regulados por la Directiva como criterio de legitimación, se delimitó a las ofertas de oferentes comunitarios, abordándose por parte de la Comisión Europea como un principio general en la discusión de la Directiva 92/13/CEE, que:

*El tratamiento de ofertas no-UE debe ser dejado a las Directivas que tratan con los procedimientos de adjudicación. Las Directivas UE crean derechos solo para los oferentes de la UE. En el evento que se creen derechos para terceros países, esto debería ser alcanzado por tratados internacionales.*¹⁵

Dicha declaración contenida en la historia legislativa de la Directiva 92/13/CEE explica y refleja el tratamiento que las personas, naturales y jurídicas, tienen

¹³ J.A. Moreno Molina, *Contratos públicos: derecho comunitario y derecho español*, McGraw-Hill 1996, p. 118, <http://dialnet.unirioja.es/servlet/extlib?codigo=55127>.

¹⁴ Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones.

¹⁵ *Commission position on amendments of European Parliament on 1st Reading*. Citado en: *European Public Procurement: Legislative History of the 'Remedies' Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC*, Ed. J.M. Hebly, The Netherlands 2011, p. 358.

en su relación con la UE, lo que no resulta extraño al sistema de fuentes del Derecho internacional público, y que lleva a la regulación de acuerdos específicos entre terceros países y la UE.

- b) El segundo hito de la regulación en materia de contratación pública con terceros países es la aprobación del Acuerdo de Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial del Comercio, por medio de la “Decisión del Consejo (94/800/CE), de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994)”.

La incorporación al ACP es muy relevante para la UE y el comercio con terceros países, ya que en dicho instrumento se acuerdan una serie de medidas destinadas a la regulación de un marco multilateral de contratación pública que sea efectivo para la liberalización y expansión del comercio internacional, bajo una serie de principios y prescripciones relativas a la no discriminación e igualdad de trato de los nacionales de cada parte respecto de los proveedores extranjeros; integridad y transparencia; eficacia y eficiencia en los procedimientos y los sistemas de contratación; entre otros.

- c) Un tercer hito identificable es la regulación de la nueva generación de directivas comunitarias en el orden de la contratación pública, donde se ha contemplado expresamente el tratamiento de las ofertas no-UE. Es así como en la propia Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, contiene en su artículo 25 mención directa a las condiciones a las que se deben ajustar los contratos públicos en los que resulten aplicable el ACP u otros acuerdos internacionales, en cuyo caso: “...los poderes adjudicadores concederán a las obras, los suministros, los servicios y los operadores económicos de los signatarios de esos acuerdos un trato no menos favorable que el concedido a las obras, los suministros, los servicios y los operadores económicos de la Unión.”¹⁶
- d) El cuarto hito, y más reciente, se produjo en 2019 cuando la Comisión Europea dictó la Comunicación de la Comisión C(2019) 5494 final, que contiene el documento denominado “Directrices sobre la participación de licitadores y bienes de terceros países en el mercado de contratación pública de la UE”, la que contiene una serie de recomendaciones y directrices para el acceso al mercado único europeo de proponentes provenientes de terceros países.

Dicho documento se encuadra en el interés de la UE de promover el mercado único europeo garantizando los principios rectores de la contratación pública, y al mismo tiempo proteger los intereses comerciales de sus miembros frente a terceros países que no siempre se encuentran sujetos a normas del mismo nivel de exigencia,

¹⁶ Similar disposición se encuentra contenida en el art. 43 de la Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

competencia y transparencia que las normas del ordenamiento jurídico comunitario, especialmente, tal como destaca el documentos, en el orden *medioambiental, social, laboral* o en lo referido al régimen de ayudas estatales o de subsidios o estímulos, que pueden llegar a producir desequilibrios en la relación de competencia entre operadores comunitarios con los no-UE.

No obstante las Directrices no reemplazan a los acuerdos internacionales específicos, si colaboran en su aplicación para que los poderes adjudicadores tengan en cuenta la participación de los terceros países a la hora de planificar los procedimientos de contratación, formular sus requisitos, efectuar las evaluaciones y, finalmente, adjudicar. Y, del mismo modo, todos los operadores económicos y poderes adjudicadores deben tener en cuenta que la aplicación de las recomendaciones, y en definitiva, de las normas reguladoras de la relación entre la UE y terceros países debe promover la igualdad de trato y la no discriminación en razón de nacionalidad, de modo que, tal como ha dicho la Comisión Europea, la aplicación de las normas de la UE se realice para que “...se garantice que los licitadores de la UE y los de terceros países apliquen las mismas normas y requisitos, o normas y requisitos equivalentes.”¹⁷

Los ejes principales de estas Directrices son:

- i. Apertura y acceso al mercado único de licitadores extranjeros, donde se debe distinguir la calidad del país no-UE, ya que únicamente son los licitadores nacionales de países con los que la Unión tiene suscritos acuerdos que regulen específicamente lo relativo a la contratación pública, los que podrán acceder en igualdad de condiciones al mercado comunitario (con excepción de contratos relacionados a defensa y seguridad), pudiendo excluirse a operadores de países con los que no exista una regulación específica;
- ii. Especial atención respecto de ofertas que contengan precios anormalmente bajos;
- iii. Contratación estratégica y de calidad, poniendo de relieve la necesidad de que los compradores públicos lleven adelante procedimientos y contratos que realcen el lugar de la contratación de innovación, la contratación ecológica, y la contratación socialmente responsable, frente a los cual los operadores no-UE deberán adaptarse para poder competir en el mercado único europeo.

2. El Acuerdo de Asociación entre la UE y Chile

La Unión Europea y Chile suscribieron un Acuerdo de Asociación (AA) que entró en vigor en el año 2003, el que tiene entre otros objetivos promover y aumentar la cooperación económica entre las partes mediante la apertura de sus mercados. En dicho sentido es que se abordan importantes materias que regulan cuestiones sobre

¹⁷ Comunicación de la Comisión C(2019) 5494 final, “Directrices sobre la participación de licitadores y bienes de terceros países en el mercado de contratación pública de la UE”, n° 6.

comercio, trata disposiciones generales, libre circulación de mercancías, comercio de servicios y derecho de establecimiento, contratación pública, competencia, solución de controversias, entre otras.

La Unión Europea se ha transformado en el tercer socio comercial de Chile, tras los China y los Estados Unidos de América, posicionándola como un actor estratégico para el desarrollo de la economía del país, duplicándose el intercambio comercial desde el 2003 con un monto de US\$ 8.399 millones, a US\$ 19.890 millones durante el 2018¹⁸, todo lo que se evidencia en el volumen de inversión directa de capitales chilenos en la UE, tal como se aprecia en la siguiente tabla:

**Inversión chilena directa en países
de la unión europea 1990 – diciembre 2019**

País	Inversión chilena directa (US\$ millones)	Participación (%)
Alemania	1.507	24,6
España	1.196	19,6
Croacia	1.006	16,4
Belgica	938	15,3
Francia	909	14,9
Inglaterra	367	6,0
Dinamarca	93	1,5
Malta	38	0,6
Italia	35	0,6
Portugal	6	0,1
Suecia	5	0,1
Otros*	16	0,3
TOTAL UE	6.117	100,0

* OTROS incluyen a Austria, Chipre, Estonia , Finlandia, Luxemburgo, Rep. Checa y Rumania, países en los que se conoce de la presencia de emprendimientos chilenos, pero no se conocen montos de inversión.

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Presencia de inversiones directas de capitales chilenos en Países de la unión europea 1990 – diciembre 2019, https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/punto-nacional-de-contacto/032_06_presencia-id-cl-en-ue-1990-dic2019.pdf?sfvrsn=be3c4dfb_1

Uno de los más importantes aspectos desarrollados en la cooperación e intercambio de las partes ha sido la contratación pública, la que ha alcanzado un importante aumento en los últimos años, todo ello dentro del ámbito de acción del propio Acuerdo de Asociación, el que aborda en forma específica a la contratación pública, en el Título IV, denominado *Contratación Pública*.

— El AA considera a la contratación pública como “Cualquier forma de contratación de bienes o servicios, o una combinación de ambos, incluidas las obras

¹⁸ SICE, Política Comercial: Novedades, Chile–Unión Europea, http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/CHL_EU_s.ASP

realizadas por entidades públicas de las Partes con propósitos gubernamentales”, de modo que da cobertura amplia a las relaciones entre la UE y Chile en lo referido al intercambio en contratación pública, asegurándose la apertura efectiva y recíproca de los mercados de contratación pública. Para ello, acuerdan una serie de medidas aplicables a toda norma, procedimiento y práctica en toda contratación realiza por las entidades de las partes, ya sea de mercancías y servicios, incluidas las obras públicas¹⁹.

2.1. Regulaciones específicas del AA en contratación pública

- a) Trato nacional y no discriminación: Se establece que cada Parte se obliga a establecer un marco normativo, legal y administrativo, que asegure que las contrataciones públicas de su territorio se realicen en forma transparente, razonable y no discriminatoria, de modo que los poder adjudicadores no otorguen un trato diferente ni menos favorable a los bienes, servicios o proveedores nacionales de la otra parte, con el objetivo de asegurar el principio de igualdad, lo que favorecerá la competencia y la concurrencia de los interesados.
- b) Apertura de concurrencia y competencia: El AA incorpora entre sus disposiciones un mandato a las partes relativo a la simplificación de los requisitos y condiciones para participar en un procedimiento de contratación pública que convoque un poder adjudicador de alguna de las partes, disponiéndose que las condiciones exigidas deberán limitar a aquellas que sean esenciales para asegurar que el interesado tenga la capacidad de cumplir con las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato.
- c) Requisitos de experiencia en el territorio de la otra parte: En el mismo sentido anterior, el Acuerdo garantiza que no podrá exigirse a un nacional de la otra parte experiencia previa en el territorio del convocante al procedimiento de contratación pública, ni contar con contratos previos adjudicados, a efectos de asegurar la apertura del mercado y no poder establecer preferencias nacionales que se pretendan fijar por medio de este tipo de requisitos.
- d) Prohibición de fijar condiciones compensatorias especiales y preferencias nacionales: El Acuerdo contempla que cada parte deberá asegurar que las normas y procedimientos de evaluación de ofertas, la selección de bienes, servicios y proveedores, y la adjudicación de los contratos, se efectúen sin establecer condiciones más favorables, medidas compensatorias ni condiciones preferentes a sus nacionales, ya que ello implicaría una vulneración grave a los fundamentos del AA.

¹⁹ El caso de los contratos de concesión de obras públicas recibe una regulación especial que se encuentra tratada se encuentran cubiertas por el Acuerdo, con particularidades que se encuentran tratadas en el Anexo XIII.

- e) Promoción de las medidas de transparencia como eje de las relaciones entre las partes: Cada Parte deberá publicar sin demora cualquier ley, reglamento, decisiones judiciales y normas administrativas de aplicación general y procedimiento, relativas a las contrataciones públicas mediante su inserción en las publicaciones pertinentes, incluidos los medios electrónicos designados oficialmente.

Un importante aspecto de accesibilidad a los mercados es el que considerada como una obligación para cada parte la difusión de las oportunidades de negocios públicos que se emitan por medio de licitaciones públicas, debiéndose proporcionar de manera completa y suficiente el contenido de los concursos a efectos de permitir la mayor competencia posible, especialmente de micro, pequeñas y medianas empresas.

- f) Plazos de presentación de ofertas: La entidades adjudicadoras deberán considerar al momento de convocar a un concurso público plazos para la recepción de ofertas que permitan a posibles oferentes de la otra parte, preparar y presentar ofertas, considerando especialmente dentro de los factores que regulan el procedimiento la complejidad de la propia contratación y, a partir de ello, establecer los plazos prudentes que permitan a los nacionales de la otra parte, preparar y formular sus ofertas desde el extranjero.

3. Participación de pymes en el mercado de contratación pública

Tal como ha sostenido la Comisión Europea²⁰, los acuerdos comerciales en el orden internacional relativo a las pymes suelen perseguir la internacionalización de las mismas producto de la relevancia que dichas empresas tienen en los mercados de trabajo nacionales, en materia de productividad y la vinculación territorial que las pequeñas y medianas empresas pueden alcanzar con otros territorios extranjeros, lo que aumenta el intercambio no solo empresarial sino que también social, político, cultural, entre otros, que son objetivos perseguidos también por el propio AA entre Chile y la UE.

La consideración de la participación de las pymes como un objetivo estratégico de la nueva contratación pública debe acompañarse de medidas e incentivos que permitan la creación de empresas y que promuevan el emprendimiento, sin que impliquen medidas anticompetitivas frente a nacionales de otros estados. El Estado, como principal motor de la economía debe abrir las puertas de las oportunidades de negocios para que las pymes sean efectivamente competitivas frente a las empresas de mayor tamaño que no experimentan las dificultades básicas para una empresa, desde el financiamiento inicial, pasando por las barreras burocráticas para comenzar las operaciones, hasta las rígidas exigencias que existen en algunos procesos

²⁰ European Commission, *Ex-ante Study of a Possible Modernisation of the EU-Chile Association Agreement Final Report*, 2017, p. 205.

licitatorios para acreditar solvencia u otros requisitos que no resultan esenciales ni se vinculan con el objeto de la contratación.

La OCDE²¹ ha recopilado las principales iniciativas que los diversos estados realizan en materia de apoyo a las pymes en América Latina y el Caribe, donde es posible identificar por una línea de capacitación y apoyo a este tipo de empresas; una segunda línea relativa a políticas específicas para el apoyo financiero y regulación específicas; y, una tercera línea de apoyo que dice relación con procedimientos específicos que tienen a potenciar el rol de las pymes en la contratación.

Iniciativas establecidas para apoyar la participación de las PYME en la contratación pública, 2018

Fuente: OCDE BID (2018 y 2015), Encuestas Contratación Pública, <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5623a414-es/index.html?itemId=/content/component/5623a414-es#fig-10.5>

A mi juicio, ninguna de las medidas indicadas afectaría, al menos en las declaraciones genéricas evidenciadas, la igualdad y la no discriminación en razón de nacionalidad, al no generarse medidas de apoyo que generen desequilibrios en la competencia producto de apoyos especiales a los proveedores nacionales, ya que todo tipo de medidas en ese sentido vulnerarían las disposiciones del AA o de otros instrumentos internacionales similares.

3.1. Las pymes y Acuerdo de Asociación UE-Chile

El AA de 2003 contiene mínimas referencias a las pymes, las que se contienen en el art. 19, bajo el título “Cooperación en el sector de las pequeñas y medianas empresas”. Las partes contemplaron únicamente referencias relativas a buenas practicas, mediante la promoción de “un ambiente favorable para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas”, sin que se previeran medidas concretas.

²¹ OECD, *Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020*, Paris 2020, <https://doi.org/10.1787/1256b68d-es>.

Es en dicho marco que una de las principales demandas de los sectores de las pymes es la modernización del AA, donde se contemplen medidas concretas, que comprometan a las partes para fomentar, promover y favorecer la participación de las pymes en los mercados conjuntos, especialmente en el ámbito de la contratación pública.

3.2. Medidas de modernización contempladas para el AA

Actualmente, la UE y Chile se encuentra avanzando en la modernización del pilar comercial del AA de 2003, para lo cual se han celebrado ocho rondas de negociaciones hasta enero de 2021. En dichas rondas se han abordado diversas materias relativas a las pymes.

En dicho marco es que la Comisión Europea en 2017 identificó, en un estudio realizado en 2017²², como uno de los ejes críticos para la modernización del AA la necesidad de introducir modificaciones en el Acuerdo para brindar mayores oportunidades a las pymes de la UE como las chilenas, atendida la falta de mecanismos específicos y sobre todo vinculantes para el desarrollo y participación de las pymes en los mercados de las partes.

Principalmente, se ha logrado identificar externalidades positivas para las pymes chilenas, ya que tal como sostiene el Informe²³, los tres subsectores (frutas, verduras y frutos secos, bebidas y tabaco y otros productos alimenticios) que han experimentado un mayor aumento de valores en sus exportaciones desde Chile son al mismo tiempo aquellos que representan el mayor número de participación de pequeñas y medianas empresas, por lo que para las pymes de Chile el acceso al mercado único europeo es extraordinariamente importante, las que representan un 40% de participación del total de exportadores de Chile a la UE²⁴.

No obstante lo anterior, no existen datos sobre la participación de pymes chilenas en procedimientos de contratación pública convocados por administración públicas de la UE, lo que pone como desafío principal la obtención de información sobre la materia.

En la quinta ronda de negociaciones del pilar comercial celebrada en el mes de julio de 2019, las partes dieron por concluidas las negociaciones técnicas respecto del capítulo de pequeñas y medianas empresas.

²² European Commission, *Ex-ante Study of a Possible Modernisation...*

²³ *Ibidem* p. 193 y ss.

²⁴ European Parliamentary Research Service. *Modernisation of the trade pillar of the EU-Chile Association Agreement*. PE 630.278 – November 2018. 8.

Según la información pública disponible²⁵, el acuerdo de modernización alcanzado considera la creación de un capítulo específico para las pymes, el que comienza con la siguiente declaración: “Las Partes reconocen la importancia de las pymes en las relaciones comerciales bilaterales a través de este capítulo, así como a través de otras disposiciones de este Acuerdo que pueden ser especialmente beneficioso para las pymes.” De mismo modo, se considera la creación de un portal electrónico para dichas empresas puedan acceder a los términos y beneficios del AA y a una base de datos que contenga los principales elementos facilitadores para la exportación de productos, además de señalarse que se establecerán puntos de contacto para la administración y facilitación del Acuerdo.

El punto más destacado en el ámbito de la contratación pública y las pymes es que se considera que en el portal electrónico de pymes se deberán publicar: “normas de contratación pública, una base de datos que contenga anuncios de contratación pública y otra información pertinente sobre las oportunidades de contratación pública”, todo lo que representa un extraordinario avance en las relaciones comerciales entre las UE y Chile, al avanzar en la contratación pública electrónica, lo que dotará de mayor apertura al sistema, incrementará las posibilidades de negocios de pymes en el ámbito público y dará mayor transparencia a las contrataciones.

4. Desafíos en el marco del comercio internacional para las pymes

La era digital tiene como beneficios poner a disposición de todos aquellos interesados la posibilidad de acceder en forma rápida y ágil a los contenidos de las plataformas digital, especialmente en materia de posibilidades de negocios con la administración pública.

Es sabido que en la contratación pública la digitalización y la transparencia juegan un papel central para un sistema democrático, ya que permiten, por una parte, dar materialidad al principio de publicidad, con el objetivo de que puedan participar la mayor cantidad de oferentes posibles, mejorar la competencia y las posibilidades de obtener mejores ofertas en su relación calidad-precio y, por otra parte, controlar las actuaciones de la administración pública, a fin de verificar que su comportamiento se ajuste a la ley y sus actuaciones sean imparciales y objetivas.

Ahora bien, para el caso de las pymes y el desarrollo de la era digital, no todo es necesariamente una ventaja, ya que tal como ha puesto de manifiesto la Organi-

²⁵ Acta reunión informativa cuarto adjunto, negociación modernización Acuerdo De Asociación Chile – Unión Europea, viernes 23 de agosto de 2019. Disponible en: https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/acuerdos-comerciales/acuerdos-en-negociacion-y-suscritos/acta-cuarto-adjunto-v-ronda-cl-ue-23-agosto.pdf?sfvrsn=8d21d3ac_2. Consulta: 14 de marzo de 2021; EU-Chile Free Trade Agreement. EU textual proposal small and medium-sized enterprises (SMEs), https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156590.pdf. Consulta: 15 de marzo de 2021.

zación Mundial del Comercio, adicionalmente a las externalidades positivas de la economía digital, también se producen problemas, tales “...como la financiación inicial, la conectividad, la retención de talentos y aptitudes, la adquisición y el almacenamiento de datos, la intimidad y otras cuestiones relacionadas con los datos.”²⁶

Dicha alerta es un punto muy relevante a la hora de tener en cuenta cuales son las medidas e incentivos para la participación de las pymes en los mercados de contratación pública internacional, especialmente para el acceso dentro del propio mercado común europeo y con mayor razón, producto de las mayores dificultades, en los mercados creados por los acuerdos de libre comercio que contemplan capítulos de contratación pública.

Una reflexión final, en torno al rol de la pymes y la situación sanitaria producto de la grave pandemia de la COVID-19, es que la afectación sobre las pequeñas y medianas empresas ha sido devastadora²⁷, por lo que urge que los estados adopten medidas de salvataje económico directo pero además medidas que promuevan la competitividad de las empresas, de modo de buscar oportunidades en la crisis que experimentamos como sociedad global.

Una experiencia relevante en el sentido de promover la competitividad durante esta crisis ha sido la adoptada por la Dirección de Compras y Contratación Pública de Chile, conocida como ChileCompra, la que ha dictado, mediante la Directiva N° 34²⁸, que contiene una serie de recomendaciones a los organismos públicos respecto de las medidas que van en directo beneficio de los potenciales proveedores del Estado con motivo de la pandemia²⁹.

En dicha Directiva N° 34 se exhorta a los organismos de la Administración del Estado de Chile a establecer en las bases de licitación o pliegos de condiciones, por una parte, la exigencia de garantías únicamente en casos estrictamente necesarios y, por otra, que *los montos exigidos sean razonables*, con especial consideración al *real riesgo de incumplimiento* por parte de un proveedor.

Estas medidas han sido adoptadas para promover la participación de micros y pequeñas empresas, a modo de facilitar el acceso a financiamiento por parte de instituciones financieras, sobre todo producto de la falta de liquidez que la crisis

²⁶ Organización Mundial del Comercio, *Informe sobre el comercio mundial 2020. Políticas gubernamentales para promover la innovación en la era digital*, 2020, pp. 30–31.

²⁷ En España la mitad de las pymes considera que producto de la crisis sanitaria su existencia se puede ver comprometida. Véase: G.R. Pérez, *La mitad de las pymes ve en riesgo su supervivencia por la crisis del coronavirus*, El País, 19.10.2020, <https://elpais.com/economia/2020-10-19/la-mitad-de-las-pymes-ve-en-riesgo-su-supervivencia-por-la-tesis-del-coronavirus.html>.

²⁸ Directiva N°34 “Recomendaciones sobre Contratación Pública para Órganos Compradores, con motivo de la pandemia del virus COVID-19”, Resolución 327-B. 13 de abril 2020. Dirección de Contratación y Compras Públicas de Chile.

²⁹ Para un mayor detalla sobre las directivas de Chile Compra en Pandemia, véase: E. Díaz Bravo, *Directivas de Compras Públicas de emergencia por la pandemia COVID-19 en Chile. Cuadernos Técnicos Emergencia Sanitaria por COVID-19, “Contratación pública”* 2020, n° 28, UNAM, México.

de salud pública ha provocado en el mercado de la contratación pública, las que no solo benefician a los proveedores chilenos, sino que también a las pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea, alcanzándose uno de los objetivos del AA, abrir los mercados, promover la competencia y facilitar al acceso a las pymes sobre todo en momentos de crisis.

Streszczenie / Resumen extenso

Dostęp MŚP do międzynarodowych rynków zamówień publicznych w ramach stosunków Unia Europejska – Chile

Współpraca przy projekcie „Publicznoprawne aspekty udziału sektora MŚP w jednolitym rynku cyfrowym (zielone technologie)” obejmuje analizę regulacji jednolitego rynku europejskiego oraz regulacji zawartych w Układzie o stowarzyszeniu pomiędzy Chile a Unią Europejską. W rozdziale omówiono ramy regulacyjne wymiany handlowej Unii Europejskiej z zainteresowanymi stronami i oferentami z państw trzecich, a także najważniejsze aktualne kwestie, które pozwalają zobrazować rozwój europejskiej struktury prawnej w odniesieniu do obywateli państw spoza UE w zamówieniach publicznych.

Jednym z głównych uczestników handlu międzynarodowego jest Unia Europejska, zwana dalej UE, która opracowała istotne ramy regulacyjne dotyczące zamówień publicznych, dzięki którym posiada jeden z najbardziej otwartych, dostępnych, konkurencyjnych i przejrzystych rynków na świecie. Tym samym system prawny UE jest wyposażony w szerokie gwarancje prawne mające na celu ochronę praw i interesów zarówno organów administracji publicznej, jak i obywateli oraz przedsiębiorstw, które uczestniczą w procesach udzielania zamówień publicznych. Przewidziano również środki mające na celu zapewnienie jak największej stabilności, bezpieczeństwa i przewidywalności prawnej inwestycji, a także mechanizmy gwarantujące integralność procedur w celu uniknięcia zjawiska korupcji.

Mając jednak na uwadze znaczenie dyscypliny zamówień publicznych oraz trudności w tworzeniu otwartych, konkurencyjnych i przejrzystych rynków, nawet w ponadnarodowych przestrzeniach o wysokim rozwoju technicznym i regulacyjnym, takich jak UE, badanie handlu międzynarodowego poza granicami UE lub w ramach wspólnego rynku europejskiego, ale z uczestnikami spoza Wspólnoty Europejskiej, wiąże się z pewnymi obawami, trudnościami i wyzwaniem.

W tym kontekście różne instrumenty międzynarodowe wypracowały znaczący dorobek prawny, który zdołał nakreślić zespół regulacji na poziomie globalnym w dyscyplinie, którą zajmujemy się w tym opracowaniu. Na szczególną uwagę zasługują porozumienie w sprawie zamówień publicznych Światowej Organizacji Handlu oraz ustawa modelowa o zamówieniach publicznych UNCITRAL, stanowią-

ce siłę napędową w dziedzinie zamówień publicznych. Niemniej jednak regulacje wielostronne nie osiągnęły pewnego rodzaju obligatoryjności między stronami, ze względu na ich charakter *soft law*, a przynajmniej w ich materialnym zastosowaniu, zauważalna jest znaczna słabość tych regulacji międzynarodowych.

W związku z tym, a także ze względu na potrzebę ochrony przez UE interesów państw członkowskich i ich obywateli oraz zagwarantowania równych stosunków z państwami trzecimi w celu promowania międzynarodowego handlu w zakresie międzynarodowych zamówień publicznych, zawarto liczne umowy o wolnym handlu, które są zgodne z zasadami przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji.

Tradycyjnie w UE istnieje obawa instytucji europejskich odnośnie do regulowania stosunków w zakresie zamówień publicznych z krajami spoza Unii. W związku z tym w 2019 r. Komisja Europejska wydała Komunikat Komisji C (2019) 5494 final zawierający dokument pt. „Wytyczne dotyczące udziału oferentów z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych oraz wprowadzania na ten rynek towarów z państw trzecich”, w którym zawarto liczne zalecenia i wytyczne dotyczące dostępu do jednolitego rynku europejskiego dla wnioskodawców z państw trzecich.

Głównymi osiami tych wytycznych są: i. Otwarcie i dostęp do jednolitego rynku dla oferentów zagranicznych; ii. Zwrócenie szczególnej uwagi na rażąco niskie oferty; oraz iii. Strategiczne i jakościowe zamówienia. Podkreśla się potrzebę wykonywania przez podmioty zamawiające umów, które zwiększają m.in. innowacyjność zamówień, zamówienia ekologiczne i zamówienia odpowiedzialne społecznie.

Unia Europejska i Chile podpisały układ o stowarzyszeniu (*hiszp.* AA), który wszedł w życie w 2003 roku, a którego celem jest między innymi promowanie i zwiększenie współpracy gospodarczej między stronami poprzez otwarcie ich rynków. Jednym z najważniejszych aspektów współpracy i wymiany między stronami były zamówienia publiczne, których liczba znacznie wzrosła w ostatnich latach, a wszystko to w ramach zakresu działania Układu o stowarzyszeniu, który w Tytule IV „Zamówienia publiczne” odnosi się szczególnie do zamówień publicznych.

Układ o stowarzyszeniu traktuje zamówienia publiczne jako „dowolny rodzaj zamówienia na towary, usługi lub ich kombinacje, włączając roboty budowlane prowadzone przez podmioty publiczne Stron do celów rządowych”, tak aby objąć szerokim zakresem stosunki między UE a Chile w zakresie wymiany w ramach zamówień publicznych, zapewniając skuteczne i wzajemne otwarcie rynków zamówień publicznych. W tym celu strony uzgadniają środki mające zastosowanie do wszystkich norm, procedur i praktyk w zakresie wszystkich zamówień publicznych przeprowadzanych przez podmioty stron zarówno w odniesieniu do towarów, jak i usług, w tym robót publicznych.

Układ o stowarzyszeniu uznaje szczegółowe regulacje dotyczące zamówień publicznych – takie jak: zasady traktowania narodowego i niedyskryminacji; otwartość w zakresie konkurencji; wymogi dotyczące doświadczenia na terytorium drugiej

strony; zakaz ustalania specjalnych warunków wyrównawczych i preferencji krajowych; promowanie środków przejrzystości – za podstawy stosunków między stronami oraz terminy składania ofert.

Uznaniu udziału MŚP za strategiczny cel nowych zamówień publicznych powinny towarzyszyć środki i zachęty pozwalające na tworzenie przedsiębiorstw i promowanie przedsiębiorczości, bez zaangażowania środków antykonkurencyjnych wobec obywateli innych państw. Państwo, jako główny motor napędowy gospodarki, musi otworzyć drzwi możliwości biznesowych, tak aby MŚP były skutecznie konkurencyjne w stosunku do większych przedsiębiorstw, które nie doświadczają podstawowych trudności związanych z prowadzeniem działalności, począwszy od początkowego finansowania poprzez bariery biurokratyczne związane z rozpoczęciem działalności aż po sztywne wymogi, które istnieją w niektórych procesach przetargowych, dotyczące potwierdzenia wypłacalności lub innych wymogów, które nie są niezbędne lub związane z celem zamówienia.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju zebrała główne inicjatywy, które poszczególne państwa realizują w zakresie wsparcia dla MŚP w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, wśród których można wyodrębnić trzy linie: jedna dotyczy szkoleń i wsparcia dla tego typu przedsiębiorstw; druga jest związaną ze szczególną polityką w zakresie wsparcia finansowego i szczególnych regulacji, a trzecia – linia wsparcia – jest związana z konkretnymi procedurami, które mają na celu zwiększenie roli MŚP w zamówieniach publicznych.

Obecnie UE i Chile czynią postępy w modernizacji filaru handlowego układu o stowarzyszeniu z 2003 roku, w sprawie którego do stycznia 2021 roku przeprowadzono osiem rund negocjacji. W piątej rundzie, która odbyła się w lipcu 2019 roku, strony zakończyły negocjacje techniczne w sprawie nowego rozdziału dotyczącego małych i średnich przedsiębiorstw.

Zgodnie z publicznie dostępnymi informacjami, w osiągniętym porozumieniu modernizacyjnym rozważa się utworzenie specjalnego rozdziału dla MŚP, będącego m.in. najbardziej znaczącym punktem w dziedzinie zamówień publicznych i MŚP. Uważa się, że na e-portalu MŚP należy opublikować: „przepisy dotyczące zamówień publicznych, bazę danych zawierającą ogłoszenia o zamówieniach publicznych oraz inne istotne informacje na temat możliwości udzielania zamówień publicznych”. Przyspieszy to rozwój stosunków handlowych między UE a Chile, dzięki postępom w zakresie elektronicznych zamówień publicznych, co zapewni większą otwartość systemu, zwiększy możliwości biznesowe dla MŚP w sferze publicznej i zapewni większą przejrzystość zamówień.

W zamówieniach publicznych cyfryzacja i przejrzystość w systemie demokratycznym odgrywają kluczową rolę, ponieważ umożliwiają z jednej strony urzeczywistnienie zasady jawności w celu dopuszczenia do udziału jak największej liczby oferentów, zwiększenia konkurencji i możliwości uzyskania lepszych ofert pod względem stosunku jakości do ceny, a z drugiej strony kontrolę działań admini-

stracji publicznej w celu sprawdzenia, czy jej postępowanie jest zgodne z prawem, a działania są bezstronne i obiektywne.

W wypadku MŚP i rozwoju ery cyfrowej niekoniecznie wszystko jest zaletą, ponieważ, jak podkreśliła Światowa Organizacja Handlu, oprócz pozytywnego oddziaływania gospodarki cyfrowej istnieją również wyzwania, takie jak „finansowanie początkowe, łączność, zatrzymywanie talentów i umiejętności, pozyskiwanie i przechowywanie danych, prywatność i inne kwestie związane z danymi”. Ostrzeżenie to jest bardzo istotnym punktem, jeżeli weźmiemy pod uwagę środki, zachęty i promocję udziału MŚP w międzynarodowych rynkach zamówień publicznych, zwłaszcza w zakresie dostępu w ramach wspólnego rynku europejskiego, a tym bardziej ze względu na większe trudności na rynkach utworzonych na mocy umów o wolnym handlu, które zawierają rozdziały dotyczące zamówień publicznych.

Istotnym doświadczeniem, w sensie promowania konkurencyjności w czasie kryzysu, jest doświadczenie przyjęte przez Dyрекcję Zamówień Publicznych i Kontraktowania Chile, znaną jako ChileCompra, która wydała, na mocy Dyrektywy nr 34, liczne zalecenia dla organów publicznych dotyczące środków, które stanowią bezpośrednią korzyść dla potencjalnych dostawców Państwa w związku z pandemią. Wspomniana dyrektywa wzywa chilijskie organy administracji państwowej do ustanowienia w warunkach przetargowych lub specyfikacjach z jednej strony wymogu gwarancji jedynie w ściśle niezbędnych przypadkach, a z drugiej strony, aby *wymagane kwoty były rozsądne, ze szczególnym uwzględnieniem rzeczywistego ryzyka niespełnienia [warunków] przez dostawcę.*

Środki te zostały przyjęte w celu promowania udziału mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw, aby ułatwić dostęp do finansowania przez instytucje finansowe, zwłaszcza ze względu na brak płynności spowodowany kryzysem w sektorze zdrowia publicznego na rynku zamówień publicznych, co przynosi korzyści nie tylko dostawcom chilijskim, ale także małym i średnim przedsiębiorstwom w Unii Europejskiej, realizując jeden z celów układu o stowarzyszeniu, którym jest otwarcie rynków, promowanie konkurencji i ułatwianie dostępu do MŚP, zwłaszcza w czasach kryzysu.

Bibliografía

- Cancino Gómez R., López Olvera M., *La contratación pública*, Madrid 2019.
- Comunicación de la Comisión C(2019) 5494 final, “Directrices sobre la participación de licitadores y bienes de terceros países en el mercado de contratación pública de la UE”.
- Díaz Bravo E., *Directivas de Compras Públicas de emergencia por la pandemia COVID-19 en Chile. Cuadernos Técnicos Emergencia Sanitaria por COVID-19*, „Contratación pública” 2020, n° 28, UNAM, México.
- Díaz Bravo E., *El recurso en materia de contratación pública en el Derecho europeo y su aplicación en España*, Valencia 2019.
- Díaz Bravo E., *El sistema de recursos en la contratación pública italiana: procedimientos y control de litigiosidad*, „Revista General de Derecho Administrativo” 2020, n° 54.

- Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
- Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
- Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE.
- EU-Chile Free Trade Agreement. EU textual proposal small and medium-sized enterprises (SMEs), https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156590.pdf. Consulta: 15 de marzo de 2021.
- European Commission, *Ex-ante Study of a Possible Modernisation of the EU-Chile Association Agreement Final Report*, 2017.
- European Parliamentary Research Service, *Modernisation of the trade pillar of the EU-Chile Association Agreement*, PE 630.278 – November 2018.
- European Public Procurement: Legislative History of the 'Remedies' Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC*, ed. J.M. Hebly, The Netherlands 2011.
- Hafsa F., Darnall N., Bretschneider S., *Estimating the true size of public procurement to assess sustainability impact*, „Sustainability” 2021, vol. 13, iss. 3, p. 1448, <https://doi.org/10.3390/su13031448>.
- Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Acta reunión informativa cuarto adjunto, negociación modernización Acuerdo De Asociación Chile – Unión Europea, viernes 23 de agosto de 2019, https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/acuerdos-comerciales/acuerdos-en-negociacion-y-suscritos/acta-cuarto-adjunto-v-ronda-cl-ue-23-agosto.pdf?sfvrsn=8d21d3ac_2.
- Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, *Presencia de inversiones directas de capitales chilenos en Países de la unión europea 1990 – diciembre 2019*, https://www.subrei.gob.cl/docs/default-source/punto-nacional-de-contacto/032_06_presencia-id-cl-en-ue-1990-dic2019.pdf?sfvrsn=be3c4dfb_1.
- Miranzo Díaz J., *La prevención de la corrupción en la contratación pública*, Madrid 2019.
- Moreno Molina J.A., *Contratos públicos: Derecho comunitario y derecho español*, McGraw-Hill Interamericana de España, 1996. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/extlib?codigo=55127>.
- Moreno Molina J.A., *Principios generales Del Derecho de la contratación pública internacional*, en *Contratación pública global: Visiones comparadas*, dir. E. Díaz Bravo, J.A. Moreno Molina, Valencia 2020, pp. 19–42.
- Moreno Molina J.A., Cancino Gómez R., *La Contratación Pública Internacional. Unión Europea – México*. 1ra ed. Oxford 2018.
- OECD, *Contratación pública*, <http://www.oecd.org/gov/contratacion-publica/>.
- OECD, *Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020*, Paris 2020, <https://doi.org/10.1787/1256b68d-es>.
- Organización Mundial del Comercio, *Informe sobre el comercio mundial 2020. Políticas gubernamentales para promover la innovación en la era digital*, 2020.
- Pérez G.R., *La mitad de las pymes ve en riesgo su supervivencia por la crisis del coronavirus*, El País, 19.10.2020, <https://elpais.com/economia/2020-10-19/la-mitad-de-las-pymes-ve-en-riesgo-su-supervivencia-por-la-crisis-del-coronavirus.html>.
- Public Procurement Indicators 2017. DG GROW, G – Single Market for Public Administration. G4 – Innovative and eProcurement. July 9, 2019.
- Rodríguez-Arana J., *Los principios del Derecho Global de la contratación pública*, en *Estudios de Derecho administrativo. El Derecho administrativo iberoamericano, innovación y reforma. Libro homenaje al profesor Juan Carlos Cassagne*, dir. J.C. Morón Urbina, J.D. Ordóñez, Lima 2018, pp. 461–485.
- Sánchez Graells A., *Competititon Law and Public Procurement*, en *Contratación Pública Global: Visiones Comparadas*, eds. E. Díaz Bravo, J.A. Moreno Molina, pp. 111–139, Valencia: 2020.
- SICE, *Política Comercial: Novedades, Chile–Union Europea*, http://www.sice.oas.org/TPD/CHL_EU/CHL_EU_s.ASP.